LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA

Por el académico DR. FERNANDO N. BARRANCOS Y VEDIA

Palabras preliminares

Agradezco profundamente a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas la alta distinción que me ha conferido al designarme como uno de sus miembros de número.

Cuadra en primer lugar efectuar una invocación del patrono del sitial que tengo el gran honor de ocupar: se trata de don José Benjamín Gorostiaga, principal redactor del texto histórico de la Constitución Nacional de 1853 y miembro informante de la comisión de Negocios Constitucionales del Congreso General Constituyente, Juez y Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gorostiaga había nacido en Santiago del Estero el 31 de marzo de 1822 y se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Su actuación pública la inició en 1852, como Ministro de Hacienda del Gobernador interino de la Provincia de Buenos Aires, don Vicente López y Planes. Ese mismo año fue designado representante -junto con el padre

Benjamín Lavaysse- de la provincia de Santiago del Estero ante el Congreso General Constituyente. En el anteproyecto de Constitución, Gorostiaga redactó de su puño y letra prácticamente la totalidad de la parte orgánica del texto así como el Preámbulo. Se inspiró en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, en los comentarios de El Federalista de Hamilton, Madison y Jay, en el proyecto de Alberdi, y en la Constitución Argentina de 1826. En 1865 Mitre lo designó Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó hasta 1868, fecha en que fue nombrado Ministro de Hacienda de la Nación; en 1871, durante la Presidencia de Sarmiento, fue designado nuevamente Juez de la Corte Suprema de Justicia, y luego, en 1877, el Presidente Avellaneda lo nombró a su vez Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ejerció hasta 1887, cuando se retiró del Alto Tribunal. De tal modo, Gorostiaga integró la Corte Suprema de Justicia durante casi veinte años, con lo cual puede sostenerse con firmeza que fue un auténtico y celoso intérprete del texto que en gran parte había sido resultado de su inteligencia y de su erudición y, de tal modo, señaló rumbos en la fecunda tarea del Alto Tribunal.

En segundo lugar, cumpla en hacer expresa invocación de quien fuera mi antecesor en el honroso sitio que habré de ocupar; me refiero al Dr. Roberto Repetto. Fue un estudioso del derecho público y constitucional argentino, Secretario de la Corte Suprema de Justicia entre 1959 y 1966, profesor universitario de derecho constitucional, quien en 1989 se opuso al proyecto de ampliar a nueve el número de integrantes del Alto Tribunal sosteniendo que ello habría de “amenazar la independencia de la Corte y, por tanto, la seguridad jurídica”, “perturbando el cabal funcionamiento de los poderes”. Fue un docente destacado que actuó en todo momento con una clara conducta cívica y con enorme probidad intelectual, recordándose en tal sentido su actuación como Rector del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), que debió abandonar en circunstancias que pusieron de relieve la firmeza de su carácter y sus sólidas convicciones.

Finalizó su actuación docente desempeñando la cátedra universitaria de Ética Política rodeado del aprecio y la consideración de sus colegas y de sus discípulos.

*

La elección del tema de esta disertación responde a diversas consideraciones que han influido sobre mi ánimo de manera decisiva.

En primer lugar, la cálida adhesión y respeto que he tenido y tengo hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, -cabeza de uno de los poderes del Estado- por el delicado rol institucional que le ha sido encomendado: supremo custodio de las garantías y derechos constitucionales y guardián del proceso político. En segundo lugar, la Corte Suprema, al ser la intérprete final y definitiva de la Constitución Nacional y efectuar con tal alcance el control de constitucionalidad de las normas y de los actos emanados de los otros poderes, ha formado, con la recopilación de sus "Fallos", el más completo y vital tratado de derecho constitucional argentino.

En la circular enviada el 16 de enero de 1863 por el gobierno del Presidente Mitre a los gobernadores de las provincias con motivo de la instalación de la Corte Suprema, se dice que: "... De hoy en adelante, la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos todos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, colocados al abrigo de un *poder moderador*, estarán garantidos contra las invasiones a que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente pueden conducir a los poderes públicos, induciéndolos a ultrapasarse el límite de sus atribuciones respectivas".

En tales referencias iniciales a la labor de la Corte Suprema de Justicia se encuentran concretados los aspectos

esenciales del papel fundamental que en la vida institucional y política se asignaba al tribunal. A partir del caso “Elortondo” (Fallos: 33:62), la Corte dejó asentado categóricamente que “... es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella; constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se han entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos”.

La Corte Suprema, además de ser el máximo tribunal de justicia del país, es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, de igual jerarquía que los otros poderes, y en tal carácter su función más firme y delicada consiste en controlar la actividad de los otros órganos para evitar sus posibles excesos, e impedir sus desbordes, ejerciendo así su primordial atribución moderadora en el funcionamiento del Estado, asegurando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. De tal modo, la Corte debe establecer si los actos de los otros poderes se adecuan a la Constitución Nacional, encauzándolos dentro de los límites y los alcances de las cláusulas constitucionales. En aquellos momentos de nuestra historia constitucional en que la Corte -o la mayoría de sus integrantes- han estado atentos a los intereses políticos del gobierno nacional, se ha quebrado el principio básico de la independencia judicial y afectado gravemente el sistema de la Constitución, pues no es función del Alto Tribunal tener como objetivo facilitar los propósitos políticos del gobierno, máxime si para su cumplimiento, los medios utilizados no concuerdan con los límites de las normas, principios y garantías de la Constitución.

Cabe tener presente que nuestra historia constitucional no ha estado exenta de tropiezos ni de vicisitudes que han oscurecido, en ocasiones, el recto y firme cumplimiento de la ley y el debido respeto por los derechos individuales y sus garantías. Estas situaciones llegaron a desdibujar el contorno y las atribuciones de los poderes políticos, y de ello no estuvo libre tampoco la Corte Suprema. Pues no hay que olvidar que el nombramiento de los jueces integrantes del Alto Tribunal ha sido tradicionalmente una atribución de los llamados “poderes políticos”. Por ello es que la historia de la Corte Suprema presenta momentos de respeto, seriedad y alta consideración, y lamentablemente, otros períodos de menor duración en la historia de las instituciones políticas del país en que la Corte no estuvo a la altura de su función.

Ahora bien, cabe recordar que la Corte es el único tribunal de justicia cuya creación deriva directamente de la Constitución Nacional. En cumplimiento de la norma del artículo 91 del texto histórico de 1853, Urquiza, en su carácter de Presidente de la Confederación Argentina, designó a sus miembros el 26 de agosto de 1854, pero contingencias de orden jurídico, político y personales de los designados, motivaron que esta Corte nunca funcionara hasta que, el 30 de octubre de 1860, el Presidente Derqui -ante la reforma constitucional de ese año- dejó sin efecto tales nombramientos.

Desde que el texto constitucional modificado en 1860 no establecía el número de integrantes de la Corte Suprema, fue necesario dictar la ley de organización de la Justicia Federal N° 27 del año 1862, cuyo artículo 6 disponía que la Corte habría de estar integrada por cinco jueces y un Procurador General. Mitre designó a Valentín Alsina (como Presidente), y a Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos como jueces, y a Francisco Pico como Procurador General. Alsina, que era Senador Nacional, no aceptó su designación, y entonces Mitre nombró Presidente a Francisco de las Carreras. El 15 de enero de 1863 asumieron sus cargos los

jueces indicados, y cabe señalar que el Tribunal funcionó con cuatro jueces hasta el mes de junio de 1865, cuando Mitre designó a José Benjamín Gorostiaga en la vacante que había dejado la renuncia de Alsina.

Es de tener presente que al designar a los primeros integrantes de la Corte Suprema, Mitre no se guió por consideraciones políticas partidistas, como él mismo lo puso de relieve: “Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una total y absoluta independencia del Poder Judicial”. Los hombres que Mitre designó para integrar la primera Corte Suprema del país unificado habían tenido anteriormente actuación en el campo del derecho y en la función pública.

Los primeros años del funcionamiento de la Corte Suprema estuvieron consagrados básicamente a afianzar los mandatos y principios de la Constitución, a la fijación de límites en las atribuciones de los poderes del Estado y al reconocimiento expreso de la facultad del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de los actos o normas emanados de los otros poderes, sosteniendo así la supremacía de la Constitución Nacional, sobre todas las otras normas integrantes del orden jurídico positivo.

Los importantes casos resueltos nos demuestran que el Alto Tribunal persiguió la finalidad de afianzar las instituciones de la Constitución, y con tal sentido produjo numerosos fallos que han fijado rumbos en la marcha del país. En 1872 en el caso “Fisco Nacional c/ Ocampo” (Fallos: 12:135), dejó sentado que la “Corte Suprema representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones”, en 1887 en el caso “Sojo”

(Fallos: 32:120) dijo que “... la Constitución es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes y la condición esencial de los fallos de la justicia federal”, en el caso “Cullen v. Llerena” del año 1893 (Fallos: 53:420) la Corte aceptó la doctrina de la no justiciabilidad de las llamadas “cuestiones políticas”, con el voto en disidencia del Juez Dr. Luis V. Varela; en el caso “Leandro N. Alem”, también del año 1893 (Fallos: 54:432), en el cual se había discutido si el estado de sitio suspende las inmunidades de los legisladores, dijo la Corte que el estado de sitio “... lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, les sirve de escudo contra los peligros de las conmociones interiores o de los ataques exteriores”.

Ahora bien, años más tarde, el gran maestro del derecho constitucional que fue el Dr. Juan Antonio González Calderón, en el tomo III de su *Tratado*, pág. 417/422, publicado en 1923, (ed. J. Lajouane y Cía.), destacaba lo que llamaba “el sentimiento de temor o de timidez frente a los poderes políticos del Gobierno Nacional” que resultaba de los fundamentos de las sentencias de la Corte, contraponiéndola al papel desempeñado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que la había llevado a ser reconocida como “la pieza maestra en el organismo político ideado por los convencionales de Filadelfia”, mientras que de nuestra Corte -decía- “sólo puede afirmarse que -exceptuando la que actuó en la primera década de la organización, ha estado siempre al margen de la verdadera y trascendental función de intérprete final y definitivo del Código soberano”. Por su lado, el Dr. Clodomiro Zavalía (en su *Historia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina*, pág. II (Ed. Talleres casa Jacobo Peuser, 1920), sostenía que “nuestra Corte Suprema no ha sabido aprovechar siempre, en la medida necesaria, las ocasiones que se presentaron propicias para exhibirla... en su verdadero carácter de destacada y permanente preponderancia”.

Asimismo Estanislao S. Zevallos (cit. por González Calderón, p. cit, en pág. 421), afirmaba en 1922 que "... la Corte Federal ha llevado una vida opaca, de acción lánguida, sin influencia gubernativa y sin prestigio popular". En sus primeros tiempos parecía gozar de mayor autoridad, que no provenía de sus fallos, sino del alto sentido político de los Presidentes, de Mitre a Avellaneda, que la honraban. La Corte fue digna; pero no siempre sabia e independiente, y a menudo contradictoria. Poco numerosos son, en efecto, los fallos que, por su orientación política, su ciencia y su doctrina, han marcado rumbos".

Tales valoraciones críticas -emitidas entre 1920 y 1923- hoy no podrían ser compartidas ni extendidas en el tiempo, sin más e "in totum". Pues si bien es cierto que a través de su historia nuestra Corte Suprema no ha asumido el papel central y descollante que en general se reconoce a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ello se debe a una serie de importantes razones, no todas imputables a la misma Corte Suprema. Por ejemplo, es dable aceptar que la comunidad argentina deposita sus esperanzas y también su confianza, primordialmente, en el Poder Ejecutivo, continuando la tradición histórica que hizo de él el Poder "fuerte"; también cabe admitir, en este orden de consideraciones, que el desequilibrio funcional y del control entre los poderes del estado, se ha manifestado incrementando las atribuciones del Ejecutivo en desmedro de los otros dos.

Es cierto, asimismo, que en nuestra historia constitucional -que no ha sido lineal y progresiva-, a veces por razones de orden político (entendido esto como "política partidista y circunstancial"), y otras veces como consecuencia de los sucesivos golpes de Estado acaecidos a partir de 1930, así como por las situaciones que se presentaron al restablecerse la vida constitucional, se han producido periódicos "vaciamientos" y "puestas en comisión" de los integrantes del Poder Judicial en su conjunto, y sucesivos cambios totales de los miembros de la Corte Suprema. Ello ha contribuido a incrementar la pérdida general de la confianza popular en las instituciones de gobierno

establecidas por la Constitución Nacional, lo cual ha redundado en perjuicio mayor de la Corte Suprema, que no detenta “ni la bolsa ni la espada”.

Cabe igualmente tener en cuenta que los antecedentes de nuestra historia política y jurídica anteriores a 1853-1860 no reconocían, por cierto, a los jueces, el papel de protagonistas principales en el desarrollo del orden jurídico positivo, sino más bien lo contrario, y tal herencia mental fue sin duda determinante de la actuación posterior de la Corte Suprema, en cuanto a sus grandes líneas. De tal manera, la actuación que le cupo desarrollar a nuestra Corte Suprema de Justicia no tuvo en general los caracteres de enérgica afirmación de su calidad de cabeza de uno de los poderes del Estado, pese a así haberlo proclamado en variadas ocasiones.

Pensamos que especialmente por el ejemplo de los grupos dirigentes en el acatamiento al texto y el respeto a los valores de la Constitución Nacional, así como la adecuada educación cívica del pueblo, habrá de hacerse posible la superación de las distorsiones que han contribuido a rebajar o desairar la idea de que nuestro más alto Tribunal de Justicia del país habría de funcionar como el “gran moderador” de nuestro sistema político jurídico, en su calidad de cabeza del Poder Judicial de la Nación.

Ahora bien, al pretender efectuar, aún someramente, un examen de las decisiones de la Corte Suprema a lo largo de los años, es de tener presente el doble aspecto en que tal examen puede o debe realizarse: el jurídico stricto sensu, en cuanto básicamente la Corte estableció los alcances y los límites de la reglamentación de los derechos personales de los habitantes y de sus garantías, así como los requisitos para la admisibilidad del recurso extraordinario, y por el otro lado, el jurídico político en cuanto al Alto Tribunal estableció a través de sus sentencias los efectos y condicionamientos del estado de sitio, o de la intervención federal a las provincias, o del indulto como prerrogativa presidencial, o de las inmunidades de los

legisladores, o las facultades de los gobiernos “de facto”, entre otros importantes temas que debió analizar.

El 19 de junio de 1903, durante la presidencia del general Roca, fue designado Juez de la Corte Suprema el Dr. Antonio Bermejo, y dos años más tarde, el Presidente Quintana lo designó Presidente del Alto Tribunal, función que desempeñó ininterrumpidamente hasta el 18 de octubre de 1929, fecha de su fallecimiento. De tal manera, Bermejo permaneció como integrante de la Corte durante veintiséis años consecutivos, siendo Presidente en los veinticuatro últimos de ese lapso, es decir, durante las Presidencias de la Nación de Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, de la Plaza, Yrigoyen, Alvear, y luego Yrigoyen nuevamente.

Bermejo fue, sin duda, uno de los grandes jueces que ha tenido la República. Había nacido en Chivilcoy el 2 de febrero de 1852 -el día anterior a la batalla de Caseros-, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, siendo discípulo de Amadeo Jacques; a los 17 años enseñaba filosofía y matemáticas; en 1876 se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y tuvo una muy destacada actuación pública desde joven; fue Diputado a la Legislatura de Buenos Aires y luego Senador Nacional y Ministro de Justicia e Instrucción Pública del Presidente José Evaristo Uriburu entre 1895 y 1897, convencional en la reforma constitucional de 1898 y Diputado Nacional.

En la excelente y cálida semblanza que sobre Bermejo escribiera Octavio Amadeo, se dice que Bermejo no era un político: “... los amigos del Comité no le atraían; no sabía darles la mano con el apretón electoral ... Debió ser siempre Juez; cuando después de rodar por cátedras, diputaciones, ministerios, entró en la Corte, pudo decirse que había encontrado su destino... La Corte era como una madre para él; la cuidaba con delicadeza... No quería que la Corte fuera utilizada como utensilio político por ningún partido... El retrato de Marshall colgaba en su escritorio... El no tenía toga, ni peluca, ni signo alguno que lo distinguiera del

hombre de la calle; era un señor cualquiera de regular estatura, que iba en tranvía, vestido de gris. Pero fue el primer juez de su país durante veinticinco años... (el) guardián de la Constitución”.

Quizá el voto de Bermejo más comentado y citado por la jurisprudencia posterior fue uno, en donde, curiosamente, expresó una opinión en disidencia de quienes formaron la mayoría: me refiero, por cierto, al caso “Ercolano c/Lanteri de Renshaw”, del 28 de abril de 1922 (Fallos: 136:1 ó 1). Allí se discutió ante el Alto Tribunal la constitucionalidad del art. 1 de la Ley 11.157, primera ley de alquileres dictada en el país. La opinión mayoritaria de los jueces Dámaso E. Palacio, José Figueroa Alcorta y Ramón Méndez aceptó la constitucionalidad de la ley, sobre la base, fundamentalmente, del desajuste existente en las leyes de la competencia y en el interés público intenso en la locación de inmuebles.

Por su parte el Dr. Antonio Bermejo emitió un extenso y famoso voto en disidencia, en el cual, citando a Alberdi, expresaba que “... la Constitución se previno contra el peligro de que el poder de hacerla efectiva degenerase en su derogación y trazó en su primera parte los principios que deberían de servir de límite a esos poderes. Primero construyó la medida y después el poder... No hay más que un sistema de reglamentar la libertad; y es el de que la libertad de unos no perjudique a la libertad de los otros... Y no puede sospecharse siquiera que, al arrendar sus bienes, el locador dañe el derecho de los demás, a menos que se pretenda que éstos son sus condóminos, lo que significaría la comunidad de los bienes, que no entró en las miras de los autores de la Constitución...”. En definitiva el Dr. Bermejo sostuvo que el art. 1 de la ley analizada era violatoria de los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional.

Ese voto de Bermejo continúa siendo citado y comentado; inspirado por las ideas de Juan Bautista Alberdi, señala claramente que el medio utilizado por el legislador en el caso para afrontar el problema de la escasez de viviendas en alquiler contradice las normas aplicables del texto constitucional.

Bermejo, como juez, no podía indicar cómo debería, en el caso, haber actuado el poder político. La circunstancia de que después de más de 75 años, el voto sigue concitando adhesiones y rechazos, demuestra su enorme vitalidad.

En 1930 la Corte Suprema fue protagonista de una de las decisiones de mayor impacto político en la historia constitucional del Alto Tribunal. Nos referimos, por cierto, a la Acordada del 10 de septiembre de 1930, sobre el reconocimiento del gobierno provisional de la Nación (Fallos: 158:290). En ese momento la Corte estaba integrada por los jueces José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, siendo Procurador General el Dr. Horacio Rodríguez Larreta. La vacante producida por el fallecimiento del Dr. Antonio Bermejo no había sido aún cubierta. El Dr. Figueroa Alcorta (ex Presidente de la Nación), había sido nombrado Juez del Alto Tribunal por el Presidente Victorino de la Plaza; los otros tres jueces (Dres. Repetto, Guido Lavalle y Sagarna) habían sido designados por el Presidente Marcelo T. de Alvear.

Muchos y muy destacados juristas e historiadores han analizado profundamente la redacción de esa Acordada, así como también las circunstancias políticas y sociales que rodearon su dictado. Sin duda que los magistrados de la Corte se vieron enfrentados ante un grave dilema con extensas connotaciones jurídicas, políticas y constitucionales. Ante la comunicación enviada a la Corte haciendo saber la instalación de un gobierno provisional, la Acordada fue dictada con la firma de todos los integrantes y la del Procurador General.

En dicha Acordada se establece que el gobierno provisional “se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden,... y que ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder”, luego hace referencia a la doctrina de facto del jurista Albert Constantineau, y señala que “... si se llegaran a

desconocer las garantías individuales... la Administración de justicia... las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de Derecho". En definitiva, se resuelve "acusar recibo" al gobierno provisional de la comunicación de referencia.

Consideramos citar, aunque sea brevemente, las reacciones de algunos distinguidos juristas y hombres públicos ante la acordada aludida. Así, el Dr. Alfredo L. Palacios, en su defensa del Dr. Antonio Sagarna en el juicio político promovido y decidido contra la Corte Suprema en el año 1947, decía: "La Corte Suprema, en circunstancias en que no existía el Poder Ejecutivo de derecho y para evitar la anarquía, reconoció la existencia de un ejecutivo de facto, con las reservas y los matices precisos que expresó. Lo reconoció después de su juramento de respetar la Constitución y dejó expresa constancia de ello... La subsistencia de la Corte fue la única garantía que quedó de la continuidad jurídica del Estado". (*La Corte Suprema ante el tribunal del Senado*, pág. 45/46, ed. JUS, 1947). Por su lado, el Dr. Julio Oyhanarte, en su *Historia del Poder Judicial* (pág. 106, año 1972) decía que "... la Corte Suprema no puede modificar el curso de la historia. Carece del poder necesario para hacerlo... La Corte en 1930 ejerció una función de salvación institucional en resguardo de los derechos humanos y de la independencia del Poder Judicial... Lo cual permite sostener que la conducta de la Corte, aunque no haya sido enteramente principista, fue la expresión benéfica de un elogiado realismo jurídico".

Asimismo, el Dr. Alberto Padilla en su interesante trabajo publicado en 1947 titulado *La Suprema Corte en 1930*, sostenía que no le correspondía al Alto Tribunal "...la quijotesca aventura de reclamar un poder que se había arrebatado a otros por la fuerza... La Corte, como poder de origen legal, aceptó coexistir con otro poder de distinto origen, bajo la condición del respeto de la Constitución, y el examen de su jurisprudencia demuestra que el Tribunal se mantuvo dentro de esa línea... En la historia del más Alto Tribunal de Justicia del país, la Corte de 1930

ocupará un sitio destacado”. En forma coincidente con estas opiniones, el Dr. Pérez Guilhou sostuvo que “...La Corte Suprema, como órgano del poder político, enfrentó el hecho consumado, procediendo a salvar la continuidad del Estado, y evitar así que éste cayera en el caos”.

Por nuestra parte, compartimos tales evaluaciones sobre la actitud de la Corte Suprema en las circunstancias relatadas. Es de recordar que en 1943, ante el golpe de Estado que derrocó al Presidente Constitucional Dr. Ramón Castillo, la Corte Suprema emitió una Acordada reproduciendo el texto de la del 10 de septiembre de 1930 (Fallos: 196:5).

La Corte que funcionó entre 1930 y 1947, presidida primero por Figueroa Alcorta y luego por Roberto Repetto, se caracterizó por adoptar una línea de interpretación dinámica del texto constitucional, sustentando el criterio de que las normas debían interpretarse adaptándolas a las exigencias, desarrollo y evolución económica, política y social del país.

En 1946 se produjo un hecho de inusitada gravedad en la historia de la Corte Suprema de Justicia: la promoción del juicio político a sus integrantes. El partido político que había accedido al poder en dicho año, contaba con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, y el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados presentó el proyecto pertinente; la causal alegada fue “mal desempeño” (art. 45 del texto de 1853/60, hoy art. 53). Como lo señala el Dr. Bidegain (*Curso de Derecho Constitucional*, vol. IV, pág. 185, N° 753, ed. 1996), en dicho proceso “fué visible una motivación netamente partidaria”; en análogo sentido, Oyhanarte (op. cit. pág. 108) expresaba que “...los cargos eran tan numerosos como endebles”, así como que “... En el debate parlamentario motivado por el juicio político, hubo una desagradable cantidad de hipocresía imputable al oficialismo, que trató de encubrir sus verdaderas razones detrás de una artificiosa construcción pseudo jurídica”.

El principal argumento para la promoción del juicio político consistió en acusar a la Corte de “abuso de autoridad y

violación de los derechos de los funcionarios” al haber dictado las Acordadas del 10 de septiembre de 1930 y del 7 de junio de 1943. En respuesta a esta acusación, podemos igualmente repetir lo que el Dr. Alfredo L. Palacios dijera en su defensa del Juez Dr. Antonio Sagarna: “La Corte Suprema no emitió juicio, ni siquiera opinión sobre la bondad o justicia de los movimientos de fuerza; no descalificó a los gobernantes de derecho que en esa época regían los destinos del país... Simplemente declaró que los funcionarios de facto... estaban en posesión de los medios reales de garantizar el orden, la paz y los servicios públicos... y efectuó el reconocimiento con las reservas expresas que en él se mencionan, lo que permitió resguardar los derechos fundamentales en la medida en que le estaba permitido...”.

Los otros fundamentos de la promoción del juicio político carecían igualmente de entidad. Por ejemplo, el que se refería al criterio “reaccionario y de clase”, atribuido a las sentencias de la Corte, no resistía el menor análisis, pues el Alto Tribunal había declarado la constitucionalidad de las primeras leyes obreras dictadas en el país, como la de descanso dominical del año 1905, o la de indemnización por accidentes de trabajo, o la de despido, entre otras, como lo destacó el Dr. Palacios. Sólo habré de citar otro punto de la acusación: el de que la lista de conjueces se integraba con “abogados del capitalismo extranjero o pertenecientes a la oligarquía dominante”. En esa lista, cuya integración detalla Palacios, se encontraban nombres como los de los Dres. Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear, Rodolfo Rivarola, Mario Bravo, Vicente Gallo, Rafael Bielsa, Octavio Amadeo y Jorge Eduardo Coll, entre muchos otros.

En definitiva, el 30 de abril de 1947 el Senado votó la destitución de los Dres. Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y del Procurador General de la Nación Dr. Juan Álvarez. El Dr. Roberto Repetto, que había renunciado por razones de salud el 24 de abril de 1946 no pudo ser incluido en la decisión desde que ya no formaba parte del Tribunal, y el Dr. Tomás Casares no fue incluido.

Como consecuencia de la decisión adoptada, la integración de la Corte fue renovada casi totalmente (cuatro jueces y el Procurador General). La Corte que se desempeñó durante el período 1947-1955 adoptó en muchas ocasiones conductas totalmente incompatibles con la independencia y seriedad con que debe funcionar el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de Justicia. Así fue como, por ejemplo, en octubre de 1955, la Corte integrada por jueces designados después del movimiento revolucionario del 16 de septiembre de 1955, declaró “nulas y sin ningún efecto” doce Acordadas dictadas entre 1952 y 1955 que expresaban adhesión al partido político dominante y al gobernante del momento, sobre la base de que eran “absolutamente incompatibles con la naturaleza de la función judicial”.

El movimiento revolucionario del 16 de septiembre de 1955 separó de sus cargos a los cinco jueces de la Corte Suprema y al Procurador General, designándose en su reemplazo a los Dres. Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Jorge Vera Vallejo, y al Dr. Sebastián Soler como Procurador General, distinguidos juristas y hombres de derecho que restauraron a través de sus sentencias los principios de libertad, reafirmando la plena vigencia de las garantías constitucionales.

Dos de los casos más importantes y de mayor influencia en la historia constitucional de la Corte Suprema fueron dictados en este período: me refiero, en primer lugar, al caso “Angel Siri” del 27 de diciembre de 1957 (Fallos: 239:459), en el cual se había interpuesto un amparo en protección de la libertad de imprenta y de trabajo, y donde la Corte, por el voto de los Dres. Orgaz, Argañarás, Galli y Villegas Basavilbaso (este último nombrado en 1956 por renuncia del Dr. Vera Vallejo), sostuvo que “... las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”; y en segundo lugar, el caso “Kot, Samuel SRL s/ recurso de habeas corpus” del

5 de septiembre de 1958 (Fallos: 241:291), donde la Corte hizo lugar a un amparo contra actos de particulares. Estos dos fallos introdujeron una acción de amparo en el derecho argentino, sin norma legal expresa que lo consagrara, y sirvieron de base y fundamento para su posterior consagración legislativa.

Más tarde, en otro importante caso, se admitió el control judicial de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la declaración del estado de sitio (caso "Antonio Sofía"), del año 1959 (Fallos: 243:504).

Durante los cuatro años del gobierno del Dr. Frondizi (1958-1962) la situación política, social y económica del país, debido a huelgas y situaciones de emergencia prácticamente generalizadas, había llevado a la sanción de normas que determinaban que los delitos que atentaran contra la seguridad, la tranquilidad y el orden constitucional, quedaban dentro de la jurisdicción de Tribunales Militares, aplicándose el procedimiento sumario establecido en el Código de Justicia Militar. En 1962 la Corte resolvió el caso "Juan Carlos Rodríguez y Conrado Ruggero" (Fallos: 254:116), en el cual el voto mayoritario admitió, en situaciones de emergencia, la validez excepcional del juzgamiento de civiles por jueces militares, especificando que "... la exclusión de los jueces de la Constitución en el juzgamiento y decisión final de las causas criminales no tiene justificativo jurídico, luego de haber superado definitivamente el episodio subversivo".

Ahora bien, en el mes de marzo de 1962, derrocado el Presidente constitucional Dr. Frondizi, y ante una serie de circunstancias políticas de inusitada gravedad y magnitud, la Corte Suprema tomó juramento al presidente provisorio del Senado, Dr. José María Guido, en carácter de Presidente de la Nación. Si bien podría sostenerse que en el caso la invocación de la ley de acefalía N° 252 no era procedente -pues el Dr. Frondizi había sido derrocado por un alzamiento militar, y no había renunciado-, permitió salvar de algún modo la continuidad, al menos formalmente, del sistema de la Constitución, aunque cabe

recordar que acontecimientos posteriores llevaron a considerar al gobierno del Dr. Guido como *de facto*.

En el año 1966, un nuevo golpe de Estado destituyó a los siete jueces de la Corte designándose en su reemplazo a antiguos y prestigiosos miembros del Poder Judicial así como también a juristas de nota: ellos fueron el Dr. Eduardo Ortiz Basualdo como Presidente, y los Dres. Guillermo Borda, Roberto E. Chute, y Luis C. Cabral y Marco Aurelio Risolía. En 1970 fue nombrada en el Tribunal la primera (y única hasta la fecha) mujer que desempeñó el cargo: la Dra. Margarita Argúas, profesora titular de Derecho Internacional Privado en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien había reemplazado al Dr. José F. Bidau, quien a su vez había sido nombrado por renuncia del Dr. Borda. Podemos recordar que en los Estados Unidos la jueza Sandra Day O'Connor fue la primera mujer nombrada en la Corte Suprema, en 1981, por el Presidente Ronald Reagan y que aún hoy integra el Alto Tribunal.

La Corte de este período (1966-1973) debió afrontar muchas veces conflictos planteados por las situaciones de tensión social derivados de movimientos insurreccionales, y la declaración del estado de sitio, con la consiguiente suspensión o restricciones de los derechos personales. En el caso "Primera Plana" del año 1970 (Fallos: 276:72), se reafirmó el análisis de la razonabilidad de los actos del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio. En un caso anterior "Alejandro Moreno" del año 1967 (Fallos: 269:200), la Corte reconoció el amplio derecho de crítica a los funcionarios públicos en razón de su desempeño como tales.

La totalidad de los jueces de la Corte presentó su renuncia el 24 de mayo de 1973 ante la asunción del nuevo gobierno elegido por el voto directo del pueblo según la reforma transitoria efectuada a la Constitución Nacional por un Estatuto fundamental dictado el 24 de agosto de 1972 por el gobierno de facto entonces existente. La Corte integrada por cinco jueces -pues el

Presidente de facto general Onganía había vuelto en 1966 al número de jueces que podríamos llamar histórico- actuó durante un breve período de menos de tres años de duración, condicionado en gran parte por claras manifestaciones de una irracional violencia subversiva. En el caso “Guzmán, Pedro c/ Provincia de Entre Ríos” del año 1974 (Fallos: 289:238), la Corte admitió la validez constitucional de una ley que imponía la afiliación a organismos de previsión y seguridad social, que en el caso se trataba del Colegio de Abogados de la Provincia estableciendo además la retención por la Caja Forense de un porcentaje de los honorarios que se regularan en juicio.

El 24 de marzo de 1976, ante el advenimiento al poder del gobierno de facto conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”, los cinco jueces integrantes de la Corte Suprema fueron destituidos (por ley 21.258), reemplazados, originariamente, por los Dres. Horacio H. Heredia, Adolfo R. Gabrielli, Alejandro R. Caride, Abelardo F. Rossi y Federico Videla Escalada. Sólo los Dres. Gabrielli y Rossi se mantuvieron en sus cargos hasta el 9 de diciembre de 1983, al finalizar el Proceso de Reorganización Nacional. Los restantes fueron reemplazados por renuncia o por fallecimiento (caso del Dr. Heredia).

Esta Corte debió intervenir muchas veces en razón de los habeas corpus interpuestos por los arrestos de personas vinculados con el estado de sitio imperante, que por otra parte, había sido establecido por el gobierno anterior en 1974 y ratificado y prorrogado en 1975 también por el gobierno anterior. El 10 de noviembre de 1977, al pronunciarse en el caso “Jaime Lokman” sostuvo el Alto Tribunal que “... las Actas Institucionales y el Estatuto para el proceso de reorganización nacional son normas que se integran a la Constitución Nacional, en la medida que subsistan las causas que han dado legitimidad a aquéllas, fundadas en un verdadero estado de necesidad que obligó a adoptar medidas de excepción...”. El Dr. Gabrielli, en su libro *La Corte Suprema de Justicia y la opinión pública-*

1976/1983 (pág. 25, ed. Abeledo-Perrot, 1986) esclarece el significado que la Corte quiso darle a la expresión: "... se integran a la Constitución Nacional", señalando que lo que el Alto Tribunal entendió por ello, fue que "... las normas dictadas por el poder de facto, aún invocándose el poder constituyente debían ser interpretadas en relación con la Constitución, evitándose ponerlas en pugna con ésta, y por el contrario, buscando conciliar unas y otras, de manera de dejar a todas con valor y efecto, en cuanto fuera posible".

Así fue como, al resolver el segundo caso "Jacobó Timerman", del 17 de septiembre de 1979 (Fallos: 301:771), la Corte en una decisión que tuvo un enorme impacto jurídico y político, dijo que "... la medida de internación impuesta al recurrente por la Resolución N° 6 de la Junta Militar tiene el carácter de sanción, como surge de su propio texto, que excede el marco de una medida de seguridad o de defensa transitoria y adquiere el carácter de pena corporal, adoptada al margen de las dos únicas figuras previstas por la Constitución Nacional, esto es, el debido proceso establecido en el artículo 18 y el arresto durante el estado de sitio autorizado por el artículo 23, contrariando las prohibiciones de condenar, aplicar penas y ejercer funciones judiciales que al poder político le imponen los arts. 23 y 95 de la Carta Fundamental... Por ello se hace lugar al habeas corpus interpuesto". En consecuencia, Timerman fue dejado en libertad.

En un caso anterior, del año 1977, la Corte había sostenido que el control de razonabilidad sobre las medidas que adopte el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio "... debe determinar al menos la pertinencia entre las razones de la detención y las causas del estado de sitio", y que las "respuestas genéricas e imprecisas eran insuficientes". (Caso "Carlos M. Zamorano", Fallos: 298:441).

En el caso "Ana María Pérez de Smith" del 21 de diciembre de 1978 (Fallos: 300:1282), la Corte dijo que "tiene el deber de actuar en ejercicio de sus poderes implícitos... en orden

a salvaguardar la eficacia de la función judicial... para el logro de resultados efectivos, plasmados en decisiones provistas de concreta utilidad para los derechos cuya protección se les demanda. En tal sentido, se decidió oficiar al Poder Ejecutivo Nacional”

El 10 de diciembre de 1983 asumió el gobierno elegido por el voto popular, restaurándose la vigencia plena de la Constitución Nacional. Los jueces que habían integrado la Corte Suprema en el proceso anterior, presentaron sus renunciaciones. Ello motivó que una vez más en nuestra historia política e institucional, la Corte Suprema fuera íntegramente renovada. El Dr. Genaro R. Carrió, prestigioso jurista, docente universitario y publicista, especialista en Filosofía del Derecho y Derecho Procesal Constitucional, y abogado de larga y reconocida actuación, fue designado Presidente del Alto Tribunal. Los demás jueces así designados -Dres. José Severo Caballero, Carlos S. Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique S. Petracchi- tenían importantes antecedentes en la docencia universitaria, en la investigación jurídica, y también en el Poder Judicial.

Apenas instalada, esta Corte tuvo que resolver acerca de la validez de los actos y normas emanados del Poder Ejecutivo de facto; en general resolvió que la validez de tales normas está condicionada a que el gobierno constitucional las reconozca, expresa o implícitamente (Fallos: 306:174 y sus citas).

En el caso “Jorge H. Granada” del 3 de diciembre de 1985 (Fallos: 307:2284), la Corte sostuvo que el arresto autorizado por el art. 23 de la Constitución Nacional relativo al estado de sitio “... remite al prudente juicio del Poder Ejecutivo acerca de que la libertad de esa persona contribuye a mantener o acrecentar la conmoción interior”. La doctrina entiende que la tesis de este fallo constituye una paralización del criterio aceptado por la Corte de la época anterior en el caso “Zamorano”.

En el caso “Ponzetti de Balbín” (Fallos: 306:1892), del año 1984, se estableció que “... el derecho a la privacidad e intimidad encuentra fundamento constitucional en el artículo 19

de la Constitución Nacional”, y en el caso “Juan Bautista Sejean” del año 1986 (Fallos: 308:2268), por la estricta mayoría de tres votos contra dos se declaró la inconstitucionalidad del artículo 64 y normas concordantes de la ley 2393 de matrimonio civil, “en cuanto privan a los divorciados de la posibilidad de recuperar su aptitud nupcial”. Cabe tener presente que este fallo tuvo un amplio impacto social y siete meses más tarde el Congreso Nacional sancionó la ley 23.515 que introdujo en nuestro derecho el divorcio vincular.

Corresponde hacer una especial referencia a la Acordada Nº 44, del 22 de septiembre de 1989, por la cual la Corte Suprema, mediante la opinión de cuatro integrantes, expresó su rechazo a la idea de aumentar el número de sus miembros, aceptando en cambio la institucionalización de su jurisdicción discrecional. Ahora bien, el 5 de abril de 1990 se sancionó la ley 23.774, que dispuso aumentar a nueve el número de miembros de la Corte Suprema y que además, modificó los artículos 280 y 285 del Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo la jurisdicción discrecional del Alto Tribunal, que se ha llamado el *certiorari* argentino.

En 1990, ante la renuncia de dos jueces y el aumento a nueve de los integrantes, el gobierno tuvo la oportunidad de designar a seis nuevos jueces. A partir de entonces, podemos decir que comenzó una nueva etapa en el funcionamiento del Alto Tribunal, caracterizada por lo que podríamos llamar “activismo” en importantes materias de hondo contenido jurídico, pero que al mismo tiempo se vio condicionado y aun alterado por el juego de tensionantes tendencias de índole política. Cabe, asimismo, recordar que en el año 1993 presentaron sus renuncias dos jueces de la Corte, como resultado de negociaciones políticas para obtener una recomposición del Alto Tribunal en miras de la reforma de la Constitución Nacional, situación ésta que no vacilamos en calificar de gravísimo atentado contra la estructura institucional de la República.

En septiembre de 1990 en el caso “Dromi, José Roberto s/Avocación en autos Fontala, Moisés Eduardo c/Estado Nacional”, por el voto de cuatro jueces se admitió el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum); y en diciembre de ese mismo año, en “Luis A. Peralta c/Estado Nacional”, el Tribunal admitió la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que dispuso la incautación de depósitos bancarios, pagaderos en Bonos Externos a un plazo de años y que producían interés. Asimismo, en el caso “Ekmekdjian c/Sofovich” del año 1992, el voto mayoritario de cinco jueces de la Corte admitió la operatividad del derecho de rectificación o respuesta (o “de réplica”) frente a manifestaciones vertidas en un programa de televisión que el actor consideró que constituían un agravio a sus convicciones religiosas, pese a no haber sido aludido directamente.

En noviembre de 1998, en el caso “Provincia del Chaco c/Estado Nacional” la opinión mayoritaria de cinco jueces en el problema suscitado por la incorporación de un Senador por la Provincia del Chaco, señaló que la cuestión remitía al modo en que el Senado de la Nación había dado cumplimiento a sus facultades privativas (art. 64, Constitución Nacional) y que la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de tales atribuciones, y en consecuencia se desestimó la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el gobernador de la provincia del Chaco... la opinión en minoría de cuatro jueces sostuvo en sustancia que la decisión del Senado importó elegir como Senador a una persona que no había sido designada por la legislatura de la provincia.

El 19 de agosto de 1999, en los autos iniciados por el Juez de la Corte Suprema Dr. Carlos Santiago Fayt mediante una acción declarativa a fin de obtener la nulidad en los términos del art. 6 de la ley 24.309 de la reforma introducida al hoy art. 99, inciso 4, en cuanto los jueces, al llegar a la edad de 75 años, necesitan de un nuevo acuerdo del Senado para mantenerse en el cargo por cinco años más, significando así una limitación a la

garantía de inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, la Corte dijo que esa cláusula adolecía de nulidad absoluta “en virtud de haberse configurado un manifiesto exceso en las facultades de que disponía la Convención, conforme al procedimiento reglado por el art. 30 de la Constitución Nacional y a lo dispuesto en la declaración de la necesidad instrumentada por la ley 24.309”.

Esta fue la primera vez en nuestra historia constitucional que la Corte Suprema declara la nulidad de una reforma practicada en el texto en razón de haber excedido los límites fijados por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

Podemos ahora preguntarnos cómo ha cumplido la Corte Suprema su delicada tarea de contralor constitucional, teniendo en cuenta que además de ser el más alto Tribunal de Justicia del país, es asimismo la cabeza del Poder Judicial, uno de los tres poderes en que se distribuyen las funciones del Estado. En “El Federalista” N° 78, Hamilton señalaba que el judicial era el más débil de los poderes del Estado, desde que no manejaba la espada ni la bolsa, y en consecuencia había que asegurarle los medios para que pudiera defenderse de los ataques de los otros. En el caso “Ríos” (Fallos: 1:30) del 4 de diciembre de 1863 dijo la Corte que el principio de la separación de los poderes requiere su observancia rigurosa “en virtud de la cual cada uno de los tres altos poderes políticos de la Nación se mantenga en el ejercicio de sus respectivas funciones”. De tal modo, la independencia, no sólo de la Corte Suprema, sino de todos los jueces, es esencial frente a los poderes ejecutivo y legislativo, y ella debe asegurarse en primer lugar con el recaudo de la inamovilidad mientras dure su buena conducta, así como “con la intangibilidad de sus remuneraciones”.

Ahora bien, estudiosos de la vinculación o relaciones entre la Corte Suprema y el poder ejecutivo a través de la historia, han destacado la afinidad ideológica o política entre ambos a lo largo de las distintas etapas de la vida del país. Así,

Oyhanarte, (en su *Historia del Poder Judicial*, pág. 89/90), decía que “... Parece ser evidente que, a lo largo del tiempo, no ha habido discordancias, sino paralelismo o adecuación entre las etapas de la Corte Suprema y las de la vida política nacional. Entiéndase bien: adecuación, no sumisión. Y está bien que haya existido esa adecuación, porque ella constituye uno de los requisitos del debido funcionamiento de nuestro sistema institucional... Está claro, por tanto, que la Corte Suprema coparticipa en el ejercicio del poder estatal y tiene a su cargo funciones que son materialmente *políticas*, en el más elevado sentido del vocablo. En tanto y en cuanto favorece la eficiencia del sistema y ahorra choques dañosos, pues, la armonía es deseable”.

Por su lado, Alberto B. Bianchi, en su trabajo titulado *Una meditación acerca de la función institucional de la Corte Suprema* (publicado en “La Ley”, T. 1997-B-1994, en págs. 1008/10121, sostiene que la Corte Suprema “... ha entendido a la división de poderes no como un sistema de confrontación con el Poder Ejecutivo, sino como un elemento de apoyo hacia aquél. Y ello lejos de ocurrir en tal o cual momento determinado, ha sido una constante verificable a lo largo de toda su historia... a) En la Argentina ningún Presidente se ha sustraído a la necesidad de colocar en la Corte Suprema a Jueces identificados con su credo político, y b) la Corte... es un poder del Estado y, como tal, lejos de estar -o poder estar- sustraída de la vida política de la Nación, está inmersa en ella profundamente. Para los norteamericanos, esta es una cuestión que se sabe y se analiza sin falsos pudores... todo presidente es susceptible de ser acusado en alguna medida de *court packing*...”. A continuación cita casos resueltos por la Corte Suprema en sus diversas épocas, desde Mitre hasta el año 1997, demostrativos de su aserto. Asimismo, el Dr. Héctor José Tanzi, en un trabajo reciente (*La Corte Suprema y el poder político*, pub. en diario “La Nación” del 25 de octubre de 1999), sostenía que “... todos los gobiernos pretendieron tener jueces adheridos políticamente y los presidentes no fueron imparciales

en su elección. Esto explicaría por qué los jueces de la Corte, desde sus comienzos, elaboraron una jurisprudencia tendiente a privilegiar los poderes presidenciales... La unidad ideológica entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema prácticamente no tuvo fracturas en la historia constitucional argentina”.

En forma coincidente, Miguel A. Ekmekdjian afirmaba, en un trabajo publicado en 1992 (*El rol institucional de la Corte Suprema de Justicia*, pub. en “La Ley”, T. 1992-A-650), que “... la actitud permisiva del Poder Judicial ha sido notoria principalmente en materia de restricción de derechos (poder de policía), tanto en situaciones normales, como en las llamadas situaciones de emergencia...”.

Nosotros pensamos que la doctrina de la “adecuación” sustentada por Oyhanarte, es extremadamente peligrosa para la independencia judicial frente al poder político, así como para la debida protección que los tribunales de justicia deben brindar a las minorías políticas, sociales, religiosas, culturales o de otra índole, en tanto éstas no atenten contra las bases del sistema.

Pero al mismo tiempo pensamos que la estabilidad en sus cargos por parte de los jueces mientras dure su buena conducta, excediendo el plazo de duración del mandato del Presidente que los designó, ha de obrar como un paliativo ante la mencionada “adecuación”, contribuyendo a una mayor independencia de los jueces.

Ahora bien, en la ponderación de los antecedentes para nominar a un Juez de la Corte Suprema, es cierto que en los Estados Unidos, su ideología política -y aún jurídica- son factores que se evalúan adecuadamente, pero como recordaba Charles Warren, “... nada es más notable en la historia de la Corte, que la forma en que fueron defraudadas las esperanzas de los que estaban seguros de que un Juez habría de seguir las opiniones del Presidente que lo había nombrado” (*The Supreme Court in Unites States History*). Así, por ejemplo, el Presidente Eisenhower designó en 1953 a Earl Warren para presidir la Corte Suprema, quien había ocupado por dos períodos la gobernación

del estado de California en representación del partido Republicano pero al frente del Alto Tribunal dirigió la jurisprudencia hacia la más extensa revolución liberal (en el sentido norteamericano de esta calificación). Cuadra recordar que Earl Warren redactó la opinión del tribunal en el famoso caso “Brown v. Board of Education”, del año 1954, que declaró la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas. El Presidente Eisenhower, al terminar su mandato, expresó que dos de sus mayores errores habían sido las designaciones de Earl Warren y de William Brennan en la Corte Suprema (este último permaneció en el Tribunal durante 34 años, entre 1956 y 1990), siendo recordado como un campeón de las libertades civiles. En el año 1952 el entonces Presidente Truman se incautó de las fábricas de acero, que se hallaban en huelga, y en el caso “Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer”, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la medida, con el voto de dos miembros designados por Truman: los jueces Harold Burton y Tom C. Clark, que contribuyeron a formar la mayoría de seis jueces contra tres jueces.

Antes que la militancia política, lo que se ha tenido en cuenta es la filosofía u orientación política y social del candidato. Y en los Estados Unidos muchas veces se ha designado para integrar la Corte a juristas de destacada actuación en el Poder Judicial, así por ejemplo, el Presidente Reagan designó en 1981 a Sandra Day O’Connor, en 1986 a Antonin Scalia, en 1987 a Anthony Kennedy, todos ellos provenientes del Poder Judicial; y el actual Presidente Clinton designó en 1993, a Ruth Bader Guinzburg y en 1994 a Stephen Breyer, también provenientes de altos cargos judiciales.

Es de recordar el famoso episodio acaecido durante la presidencia de Franklin Roosevelt conocido con el nombre de *court packing plan* (plan para empaquetar a la Corte); entre 1933 y 1936 la Corte Suprema de los Estados Unidos había declarado la inconstitucionalidad de varias normas dictadas para la realización de la política llamada del *New Deal*, que preconizaba

la intervención del Estado en las relaciones jurídicas y económicas privadas. Ante ello, se idearon diversos medios para “copar” la Corte con adeptos a la política de Roosevelt; así, desde que el Tribunal contaba con varios jueces mayores de 70 años (entre ellos, tres de los cuatro jueces que votaban sistemáticamente contra las leyes del *New Deal*: los jueces van Devanter, McReynolds y Sutherland), la Corte se ampliaría con un nuevo juez en cada caso de un juez de 70 años, hasta llegar a un máximo de seis (con lo cual el Tribunal podría llegar a contar con quince miembros). Este plan produjo honda conmoción en la sociedad norteamericana, y en definitiva no fue necesario instrumentarlo, debido por un lado a la falta de apoyo de importantes miembros del partido político del Presidente, y por otro lado, al cambio de opinión de uno de los jueces (Owen J. Roberts) y al retiro de otro (Willis van Devanter), reemplazado este último por Hugo Black (ferviente partidario del Presidente Roosevelt y de su política del *New Deal*). Cabe asimismo recordar que al tratarse en el Senado la iniciativa del Presidente Roosevelt, ésta sólo obtuvo veinte votos, pese a que en dicho cuerpo el partido Demócrata contaba con 79 miembros, o sea, una amplia mayoría. Es de aplaudir que allí triunfó la república, es decir, la división y la limitación del poder.

Por otro lado, pensamos que en nuestro país, si bien en algunas etapas de la vida de la Corte Suprema se designó juristas no comprometidos abiertamente con la visión política del gobierno, práctica ésta iniciada por Mitre, lamentablemente ello no se mantuvo a lo largo de la historia del Alto Tribunal. Como lo hemos puntualizado con anterioridad, son diversas las causas y las razones que han contribuido a debilitar, disminuir u oscurecer el fundamental papel institucional de controlar la actividad de los otros poderes del Estado; los avatares de nuestra vida política, los repetidos cambios totales de la integración de la Corte, las consecuencias funestas del juicio político de 1947, los golpes de Estado, la manipulación a que fue sometido el Alto Tribunal para modificar el número de sus integrantes y no

precisamente por razones institucionales, dejaron su marca en el delicado quehacer de la Corte Suprema. Es de recordar aquí que durante la presidencia del Dr. Frondizi se sancionó la ley N° 15.271 que en 1960 aumentó a siete el número de sus integrantes; en 1964 durante la presidencia de Illia se propuso aumentar a once el número de sus miembros; en 1966 el presidente de facto general Onganía por ley N° 16.895 volvió al número de cinco los integrantes del Alto Tribunal, en 1987 durante la presidencia de Alfonsín se redactó un proyecto que aumentaba a siete sus miembros, y en 1990 por ley 23.774 se aumentó a nueve su número. Y actualmente con la reforma constitucional de 1994 y la creación de un Consejo de la Magistratura con atribuciones realmente exorbitantes, se ha privado a la Corte Suprema de importantísimas facultades inherentes a su calidad de cabeza de uno de los tres poderes del Estado.

Al hacer en 1982 un balance de la jurisprudencia de la Corte Suprema “en el sector constitucional de la libertad y de los derechos personales”, entendía Bidart Campos que el saldo “es positivo” (*La Corte Suprema. El Tribunal de las garantías constitucionales*, págs. 10/11, ed. Allend & Brea, 1982), y agregaba que “... La doctrina puede siempre volver sobre esa jurisprudencia, felicitarla o denostarla, pero no partiría de una actitud correcta y objetiva, si al hacer una cosa o la otra no asumiera la convicción de que está ante la obra de un tribunal formado por hombres que, por más imparcialidad que deben guardar y se les debe exigir, participan del entorno en que viven y en que gobiernan los hombres, en un lugar, en un tiempo, ... y en la convivencia ineludible con otros órganos de poder que son como son y que actúan como actúan”, opinión que ratificó en 1999.

Compartimos en términos generales esta apreciación de la actividad de la Corte Suprema en el campo de las libertades personales y de las garantías constitucionales, sin perjuicio de entender que la excesiva amplitud que se llegó a reconocer a las normas limitativas de los derechos personales (p.ej., caso

“Peralta”, del año 1990), contribuyó a oscurecer el ámbitopreciado de la seguridad jurídica.

Por otro lado, es preciso admitir que la jurisprudencia de la Corte en materia de la protección de la libertad y de los derechos personales, se enriqueció con grandes creaciones pretorianas, como la introducción en el derecho argentino de la acción de amparo, de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, de la pauta valorativa de la gravedad institucional como criterio de apertura del recurso extraordinario, del procedimiento del *per saltum*, del criterio de la real malicia como determinación de la amplitud de la facultad de crítica de los medios de prensa frente a la actuación de los funcionarios públicos.

En cambio, si bien la Corte en materia de control de la constitucionalidad de los actos y normas emanados de los poderes políticos dictó importantes decisiones asumiendo su papel moderador en la esfera constitucional del funcionamiento de los otros poderes (como, por ejemplo, en materia de estado de sitio, desde el caso “Alem” del año 1893 hasta los casos “Zamorano” de 1977 y “Timerman” de 1978; o últimamente en materia de inmunidad de los legisladores, como el caso “Pelaez” del año 1995), sin embargo, en otros casos recientes, no estuvo de ninguna manera a la altura de la grave responsabilidad institucional resultante de su fundamental atribución de controlar e impedir los excesos en que incurren los otros poderes (como, por ejemplo, en el caso “Provincia del Chaco c/Estado Nacional”, del año 1998), contribuyendo así a que se le adjudique falta de independencia frente al poder político.

Es decir, que el Alto Tribunal, como lo anunciaba en septiembre de 1864 su Secretario, Dr. José Miguel Guastavino, en el Prefacio al primer tomo de la colección de sus “Fallos”, debe imprescindible y urgentemente dar cumplimiento a que “con su acción sin estrépito pero eficaz”, llegue a obtener que “la Constitución eche hondas raíces en el corazón del pueblo”. Esta es por cierto su más grave asignatura pendiente.